

- 3.16. Contra el auto inmediatamente anterior, el apoderado de la parte accionante interpuso recurso de reposición, el cual se fijó en lista. (Fl. 278 del cdno. No. 7.)
- 3.17. A través de auto 341 del 27 de octubre de 2010, no se repuso el auto objeto del recurso. (Fls. 281 a 283 del cdno. No. 7.)
- 3.18. Mediante auto 188 del 3 de febrero de 2011, se fijó fecha para realizar audiencia de conciliación. (Fl. 284 del cdno. No. 7.)
- 3.19. El 2 de marzo de 2011, se llevó acabo la audiencia de conciliación. (Fls. 310 a 314 del cdno. No. 7.)
- 3.20. Por medio de auto 151 del 2 de mayo de 2011, se emitió el decreto de pruebas. (Fls. 388 a 406 del cdno No. 7)
- 3.21. Contra el auto de pruebas, la CVC interpuso recursos de reposición, el cual se fijó en lista. (Fls. 407 a 413 del cdno. No. 7.)
- 3.22. Por su parte, el accionante, interpuso recurso de apelación contra el auto de pruebas. (Fl. 424 del cdno. No. 7)
- 3.23. Mediante auto del 18 de mayo de 2011, se rechazó por improcedente el recurso de reposición interpuesto y se concedió el de apelación. (Fls. 427 a 429 del cdno. No. 7)
- 3.24. El día 19 de octubre de 2011, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, revocó el numeral segundo del auto que admitió la acción, en cuanto a la exigencia de integrar la demanda con la adición y ordenó adicionar el auto de pruebas con las pruebas solicitadas en la reforma de la demanda. (Fls. 445 a 449 del cdno. No. 7)
- 3.25. En cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal, se emitió el auto No. 0017 del 25 de enero de 2012 y se adicionó el auto de pruebas. (Fls. 452 a 484 del cdno. No. 8)
- 3.26. El día 13 de febrero de 2013, el apoderado de la parte accionante, solicitó se decrete la nulidad de todas las actuaciones realizadas en el proceso ya que a partir de la vigencia de la Ley 1437 de 2011, la competencia de esta acción la tiene el Tribunal Contencioso Administrativo. (Fl. 334 del cdno. No. 11.)
- 3.27. A través de auto No. 324 del 28 de mayo de 2013, se rechazó la nulidad propuesta. (Fls. 341 a 345 del cdno. No. 11)
- 3.28. Contra el auto inmediatamente anterior, la parte accionante interpuso recurso de apelación. (Fls. 355 y 356 del cdno. No. 11.)

- 3.29. Mediante auto No. 350 del 18 de junio de 2013, se negó el recurso de apelación interpuesto contra el auto 806 del 18 de octubre de 2012. (Fls. 361 a 363 del cdno. No. 11.)
- 3.30. Mediante auto No. 351 del 18 de junio de 2013, se concedió el recurso de apelación interpuesto contra el auto 234 del 28 de mayo de 2013. (Fls. 364 y 365 del cdno. No. 11)
- 3.31. Posteriormente a través de auto 653 del 31 de octubre de 2013, este Despacho declaró que carece de competencia para continuar conociendo de la presente acción y lo remitió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. (Fls. 378 y 379 del cdno. No. 11.)
- 3.32. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en auto No. 293 del 20 de septiembre de 2013, decidió no darle trámite al recurso de apelación interpuesto contra la providencia No. 324 del 23 de mayo de 2013. (Fls. 394 a 397 del cdno. No. 11.)
- 3.33. Contra el auto emitido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el apoderado de la parte accionante interpuso recurso de queja. (Fls. 398 y 399 del cdno. No. 11.)
- 3.34. A través de auto 368 del 36 de noviembre de 2013, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, rechazó el recurso de queja. (Fls. 414 a 416 del cdno. No. 11.)
- 3.35. Por medio de auto 029 del 6 de febrero de 2014, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se declaró incompetente para conocer en primera instancia esta acción y remitió el proceso nuevamente a este Despacho. (Fls. 420 a 422 del cdno. No. 11.)
- 3.36. El 14 de noviembre de 2014, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de desastres NGRD, solicitó ser incluido como parte pasiva de la litis en una sucesión procesal con el Ministerio del Interior, en tanto que mediante el Decreto No. 4147 del 3 de noviembre de 2011 adquirió personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio. (Fls. 453 a 459 del cdno. No. 11)
- 3.37. Una vez vencido el periodo probatorio, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, mediante auto 887 del 5 de octubre de 2017. (Fl. 384 del cdno. No. 14.)
- 3.38. La parte demandante, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, el Consorcio Progreso Buga, el Ministerio de Ambiente y la Previsora SA. Compañía de Seguros, presentaron sus alegatos dentro del término



establecido para tal efecto, mientras que el Instituto Nacional de Vías INVIAS y el Ministerio de Tránsito y Transporte, presentaron sus alegatos por fuera del término, tal como se observa en la constancia secretarial visible a folio 659 del cuaderno principal.

#### IV. CONTESTACIONES DE DEMANDA

- 4.1. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, dentro del término contestó la demanda el 16 de febrero de 2009, donde manifestó que ha cumplido con sus funciones constitucionales y legales, establecidas en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, ya que realizó convenios, contratos y estudios con entidades públicas en beneficio del medio ambiente, la comunidad y la conservación de los recursos naturales ejecutando actividades de prevención, reducción y mitigación de riesgos, como son el convenio interadministrativo No. 168 de diciembre 31 de 2003, con la Universidad del Valle para la formulación de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas en el Valle del Cauca, entre las que se encuentran las del río Dagua, Anchicaya y Calima, convenio de asociación No. 106 de 2004 celebrado con la Fundación San Cipriano – La Universidad del Pacífico y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, cuyo objeto es aunar esfuerzos, recursos económicos y técnicos para la implementar actividades concertadas para el manejo ambiental de los ríos San Cipriano y Escalerete, entre otros. Interpuso la excepción denominada como inexistencia de causa que haya generado perjuicio. (Folios 208 a 245 del cdno. No. 3 y 246 a 603 del cdno. No. 4.)
- 4.2. El Distrito de Buenaventura, dentro del término contestó la demanda el 26 de febrero de 2009, manifestando que no es la entidad responsable de los eventos mencionados en esta acción en acatamiento de lo establecido en la Ley 136 de 1994, que define los marcos de competencia funcional de los municipios como entidades territoriales. (Fls. 619 a 622 del cdno. No. 4.)
- 4.3. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, dentro del término contestó la demanda el 27 de febrero 2009, argumentando que es una entidad cuya función es fijar o establecer las políticas a nivel nacional en materia de medio ambiente, uso del suelo, ordenamiento urbano, agua potable, saneamiento básico, desarrollo territorial y habitacional integral,

más no ejecutar proyectos relacionados con atención y prevención de desastres. Interpuso las excepciones denominadas como falta de legitimación en la causa por pasiva, fuerza mayor o caso fortuito como eximente de responsabilidad y culpa exclusiva de la víctima. (Fls. 624 a 640 y 668 a 683 del cdno. No. 4.)

- 4.4. El Ministerio de Transporte, dentro del término contestó la demanda el 03 de marzo de 2009, donde expresó que no es responsable solidariamente de los hechos relatados en esta acción, porque las entidades encargadas de la ejecución de los estudios, programas, construcción, conservación y mantenimiento de las carreteras nacionales, son el Fondo Vial Nacional, el Instituto Nacional de Vías INVIAS y/o el Distrito de Buenaventura ya que el Ministerio de Transporte, es un organismo eminentemente regulador, planificador y normativo del sector transporte. Además interpuso excepciones denominadas como falta de legitimación en la causa por pasiva, caducidad de la acción, inexistencia de la obligación e inexistencia de responsabilidad. (Fls. 648 a 660 del cdno. No. 4.)
- 4.5. El Instituto Nacional de Vías, dentro del término contestó la demanda el 22 de abril de 2009, manifestando que su objeto es la ejecución de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de Carreteras, primaria y terciaria, por lo que en su cumplimiento suscribió en el 2004 el contrato No. 1877 con el Consorcio Progreso Buga, por valor de \$67.177'497.920, a fin de realizar el "Mejoramiento y mantenimiento integral de la ruta Buenaventura – Buga del corredor vial del Pacífico (Incluido el mantenimiento rutinario, la señalización, el monitoreo y vigilancia y los conteos de tránsito) Ruta 40 tramo 4001 y el contrato No. 1948 con el Consorcio Ingeniería de Proyectos Ltda – Jose Manuel Guardo Polo, por valor de \$4.912'623.103, con el fin de realizar la interventoría del contrato 1877, es decir que el sector de la ocurrencia de los hechos estaba a cargo del Consorcio Progreso Buga, por otro lado, expone que para la época de los hechos no recibió órdenes del Sistema Nacional Para la Prevención y Atención de Emergencias, para ejecutar programas en la zona y que es de conocimiento público que los accionantes durante muchos años anteriores a la avalancha, ejecutaron actividades de ganadería, agricultura y minería en las zonas de ladera de las montañas, lo que trajo como consecuencia la avalancha sucedida el 12



de abril de 2006. Como excepciones interpuso las denominadas, inexistencia de fundamento legal para demandar, falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de responsabilidad, culpa exclusiva de la víctima, compensación y la genérica. (Fis. 90 a 115 del cdno. No. 5.)

- 4.6. El Ministerio del Interior y de Justicia, dentro del término contestó la demanda el 30 de noviembre de 2009, manifestando que en el Decreto 919 de 1989, están claramente explicadas las funciones que cumple la Dirección de Gestión del Riesgo para la Prevención y Atención de Desastres, dependencia del Ministerio del Interior, la cual cumple específicamente una labor de coordinación entre las diferentes entidades que componen el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, sin corresponderle actividades directas de planeación y ejecución de obras de infraestructura tendientes a evitar desastres en zonas de alto riesgo, labor que en primera instancia corresponde a las autoridades municipales y regionales. Interpuso las excepciones de inexistencia del derecho y falta de legitimación en la causa por pasiva. (Fis. 36 a 46 del cdno. No. 7.)

- 4.7. La Gobernación del Valle del Cauca, no contestó la demanda.

## V. VINCULACIÓN DE LLAMADOS EN GARANTÍA.

- 5.1. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, llamó en garantía a LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, en razón a la póliza de seguro de responsabilidad extracontractual No. 1002598 que cubre desde el 31 de mayo de 2005, hasta el 31 de mayo de 2006. (Fis. 1 y 2 del cdno. llamamiento en garantía No. 1.)
- A través de auto 068 del 24 de abril de 2009, fue aceptado el llamamiento en garantía propuesto por la CVC. (Fis. 24 a 26 del cdno. llamamiento en garantía No. 1.)
  - El 26 de junio de 2009, LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, contestó el llamamiento e interpuso las excepciones denominadas como inexistencia de responsabilidad del ente demandado, culpa de terceros, inominada, inexistencia de obligación por pago total y límite de la suma

asegurada en responsabilidad civil, prescripción del llamado en garantía e inexistencia de la obligación contractual por falta de cobertura. (Fls. 28 a 35 del cdno. llamamiento en garantía No. 1.)

5.2. Por su parte, el Instituto Nacional de Vías INVIAS, en escrito visible a folios 68 a 74 del cuaderno de llamamiento en garantía No. 2., llamó a ser parte pasiva de la litis a la compañía de seguros QBE SEGUROS S.A., antes CENTRAL DE SEGUROS S.A., en razón a la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 120100000432 con vigencia del 17 de septiembre de 2005 al 18 de septiembre de 2006 y a los integrantes del CONSORCIO PROGRESO BUGA, debido a la suscripción del contrato 1877 del 19 de noviembre de 2004, conformados por: CUBIDEZ Y MUÑOZ LTDA, CADSA GESTIONES Y PROYECTOS S.A., LOBOGUERRERO CONSTRUCTORES LTDA, CONCREARMADO LTDA, LAVICON LTDA, REYES Y RIVEROS LTDA, GEOFUNDACIONES S.A., SOCIEDAD MELO Y ÁLVAREZ PROYECTISTAS Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS LTDA, CEIC LTDA, CONSTRUCTORA CASTELL CAMEL LTDA, CONSTRUCTORA PRECOMPRIMIDOS S.A. y CONSULTORES CIVILES E HIDRÁULICOS LTDA.

- Los anteriores llamamientos en garantía fueron aceptados en auto 069 del 24 de abril de 2009, visible a folios 76 a 81 del cuaderno de llamamiento en garantía No. 2.
- Contra dicho auto, QBE SEGUROS S.A., interpuso recurso de apelación y solicitó la práctica de pruebas. (Fls. 122 a 125 del cdno. llamamiento en garantía No. 2.)
- El 17 de junio de 2009, QBE SEGUROS S.A. contestó el llamamiento en garantía e interpuso las excepciones denominadas inexistencia de falla en el servicio, caducidad, ausencia de los perjuicios reclamados, límite de cobertura de la póliza y la genérica. (Fls. 136 a 141 del cdno. llamamiento en garantía No. 2.)
- El 16 de julio de 2009, CUBIDEZ Y MUÑOZ LTDA, CADSA GESTIONES Y PROYECTOS S.A., LOBOGUERRERO CONSTRUCTORES LTDA, CONCREARMADO LTDA, LAVICON LTDA, REYES Y RIVEROS LTDA, GEOFUNDACIONES S.A., SOCIEDAD MELO Y ÁLVAREZ PROYECTISTAS Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS LTDA, CEIC LTDA,